

CONDICION VEINTIDOS

DE LA SUBASTA

Por la inserción de edictos y anuncios oficiales que sean de pago, se satisfará por cada línea 25 céntimos de peseta, haciéndose la inserción precisamente en el tipo de letra que señala la condición 19.



BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE ORENSE

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS

EXCEPTO LOS DOMINGOS

PRECIO DE SUSCRIPCION

Un trimestre dentro y fuera de la capital. . . 5 ptas
Números sueltos. 0'25
Se admiten suscripciones en la Imprenta LA POPULAR, Orense.

*ADVERTENCIA.—Las leyes obligarán en la Península, Islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos a la legislación peninsular, a los veinte días de su promulgación, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Se entiende hecha la promulgación el día en que termine la inserción de la ley en la *Gaceta*.
(Artículo 1.º del Código civil).

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA

del

CONSEJO DE MINISTROS.

SS. MM. el Rey y la Reina Regente (que Dios guarde) y Augusta Real Familia continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

(Gaceta del día 3.)

Gaceta núm. 33

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido a virtud de consulta elevada a la Subsecretaría de este Ministerio por la Delegación de Hacienda en Málaga acerca de la recta interpretación de los artículos 6.º del Real decreto de 16 de Marzo de 1886 y 62 del reglamento de 5 de Mayo del mismo año; y

Resultando que dicha consulta ha sido producida por el Administrador de Contribuciones de aquella provincia, que pregunta si tiene facultades para pedir directamente al Abogado del Estado el bastanteo de los poderes que presenten los contribuyentes y los informes que estime precisos para el despacho de los expedientes cuyas decisiones constituyan tan solo actos administrativos por exigirlo, a su juicio, las condiciones de brevedad que requieren los asuntos del servicio, así como los principios de la jerarquía administrativa y las prescripciones del art. 6.º del Real decreto de 16 de Marzo de 1886 y el 62

del Reglamento de 5 de Mayo de igual año:

Considerando que siendo numerosas y variadas las funciones que las disposiciones vigentes encomiendan a los Abogados del Estado, ha de tenerse en cuenta que como Asesores de las Autoridades provinciales de Hacienda, el Real decreto de 16 de Marzo de 1886, disposición fundamental que rige al Cuerpo de Abogados del Estado sienta el principio de que éstos han de prestar sus servicios bajo las ordenes inmediatas de los Jefes de las dependencias a que están ascritos de lo cual se deduce que el Abago del Estado en una Delegación en que desempeña funciones de Asesor, depende exclusivamente del Delegado único funcionario dentro de la oficina con atribuciones para reclamar su informe:

Considerando que la práctica y algunas disposiciones administrativas han confirmado esta doctrina, única admisible si ha de existir un deslinde de atribuciones dentro de la Administración, porque siendo las funciones administrativas y de recaudación completamente independientes y diversas de las cuestiones de derecho que envuelvan las reclamaciones de los interesados, solo éstas podrán ser objeto de informe facultativo del Abogado del Estado, quien en su carácter de Asesor para nada tiene que intervenir en aquellos actos puramente fiscales y administrativos en la verdadera aceptación de la palabra:

Considerando que la gestión de los diferentes servicios encomendados a las oficinas provinciales se desempeña por funcionarios exclusivamente destinados a los mismos y que están obligados a conocer las leyes y reglamentos que deben aplicar en sus propuestas, y solo en aquellos casos en que se ventilen cuestiones jurídicas deberá pedirse el parecer del Asesor cuyo informe constituye, por tanto, una excepción de la regla general, y por eso el art. 23 del reglamento orgánico de ese centro preceptúa que cuando un expediente pase a informe del mismo, se fijen con toda precisión los puntos de derecho a que debe contraerse el dictamen:

Considerando que en el caso de que el Administrador de Contribuciones, el Interventor o cualquiera otro funcionario de la oficina provincial es-

time pertinente oír el parecer del Abogado del Estado, deben proponerlo así al Delegado, pues este trámite no ofrece las dilaciones que en la consulta se suponen, y, por otra parte, los pocos casos en que sea necesario, no autorizan a modificar las reglas y prácticas establecidas:

Considerando que el fundamento aducido en la consulta referente a los principios de la jerarquía administrativa no es admisible tampoco, porque este Ministerio distribuye el personal del Cuerpo, atendiendo a las necesidades del servicio, y si bien en la Delegación de Hacienda en Málaga el Abogado del Estado tiene hoy inferior categoría a la del Administrador consultante, no acontece así en otras provincias como por ejemplo en las de Madrid y Barcelona, en las que el Administrador de Contribuciones es Jefe de Administración de cuarta clase y de Negociado de primera, y el Abogado del Estado es Jefe de Administración de tercera y Jefe de Administración de cuarta respectivamente, y la jerarquía no resulta quebrantada en ningún caso, dependiendo este funcionario exclusivamente del Delegado de Hacienda.

Y considerando, por último, que precisa además tener en cuenta el carácter especial que los Abogados del Estado tienen por las disposiciones vigentes, que no atienden en ellos a las respectivas categorías de que puedan disfrutar mas que en cuanto se relaciona con el régimen interior del Cuerpo que constituyen toda vez que, fuera de este punto, equiparan a todos ellos en cuanto a competencia y desempeño de funciones se refiere, comprendiéndose, bajo la denominación general de Abogados del Estado lo mismo a los que han alcanzado la categoría de Jefe de Administración que a los que pertenecen a la de Oficiales de Hacienda;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino de conformidad con lo propuesto por esa Dirección general, se ha dignado acordar que se conteste a la Delegación de Hacienda en Málaga que solo el Delegado a quien legalmente le represente, podrá pedir al Abogado del Estado que informe en derecho sobre aquellas cuestiones en que lo estime conveniente, y que esta decla-

ración sirva de regla general en casos análogos.

De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13 de Diciembre de 1890.—Cos-Gayón.—Sr. Director general de lo Contencioso.

MINISTERIO DE ULTRAMAR

REALES ORDENES.

(Gaceta núm. 31)

Excmo. Sr.: Pasado a informe de la Sección de Hacienda y Ultramar del Consejo de Estado el expediente sobre recurso de alzada que establecen para ante este Ministerio varios vecinos del Ayuntamiento de Jovellanos contra el acuerdo de la Comisión provincial de Matanzas, que anuló las elecciones municipales verificadas en dicha villa en el mes de Mayo último, ha emitido el siguiente dictamen:

«Con Real orden de 3 de Noviembre comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E., se remitió a informe de la Sección el expediente en que varios vecinos de Jovellanos reclaman contra el acuerdo de la Comisión provincial de Matanzas, que anuló las elecciones municipales últimamente celebradas en el mes de Marzo.

El Gobernador general de la isla manifiesta que don Ignacio Gonzalez y once vecinos más de Jovellanos interpusieron el referido recurso contra el acuerdo que anuló las operaciones electorales de los días 4, 5, 6 y 7 de Mayo del presente año; y que en su concepto debe confirmarse el acuerdo apelado.

Alegan los reclamantes que de la certificación expedida por el Párroco de Jovellanos aparece que las listas no están formadas con arreglo al art. 22 de la ley Electoral, pues hay varios electores menores de edad, entre ellos don Juan P. Garzón y Garzón, que cuenta solo trece años; que hay falsedad en las listas, pues consta el voto del Pardo Juan de la Cruz Fernandez, a pesar de que el Ayuntamiento y Comisión provincial declararon al mismo excluido de las listas, sin que

el mismo apelo de este acuerdo; que formó parte de la Mesa interina don Eugenio Alonso Pacheco, sobrino del Alcalde, menor de edad é incluido en los incisos 8 y 10 del art. 167 de la ley Electoral; que según acta notarial se ejerció coacción sobre los electores que deseaban se identificase la persona de don Manuel Fernandez, dando lugar á que la guardia de Orden público acudiera á ponerlo en el Colegio; que según testifican 39 electores, el Alcalde y el Contador del Ayuntamiento ejercieron coacciones sobre ellos, entregándoles las candidaturas que eran de su agrado; que se infringió el art. 28 de la ley Electoral negando el Alcalde varios atestados á electores que los pedían; y que á pesar de todo, el partido del Alcalde solo ganó las elecciones por una mayoría de nueve votos.

Reunido el Ayuntamiento con la Junta de escrutinio, se infringió en la votación el art. 87 de la ley Electoral, tomando parte en ella el Alcalde.

La Diputación provincial dedujo del estudio de este expediente que existía falsedad en las listas por figurar en ellas Juan de la Cruz Fernandez; que está demostrada la coacción ejercida sobre los electores, no solo por la Mesa, sino por los empleados municipales que estaban en el Colegio, siendo Secretario de la Mesa definitiva el ejecutor de apremio don Heliodoro Zúñiga, y habiendo amenazado, revolver en mano, á los electores el celador de policía; que aunque los amenazados acudieron á los Tribunales de justicia, como éstos no pueden decidir de la validez ó nulidad de las elecciones, no quedarían reparados tantos agravios, y finalmente que procede por todas estas causas declarar la nulidad de las elecciones y que se llame la atención del Gobernador civil sobre las responsabilidades que de todo lo indicado se derivan, á fin de pasar el oportuno tanto de culpa á los Tribunales.

El Negociado correspondiente en este Ministerio dijo que los hechos en que se funda el acuerdo impugnado por los recurrentes ni afectan á la validez de las listas electorales ni de la división del distrito en Colegios, puesto que, con arreglo al art. 61 de la ley todos los electores inscritos en el libro del Censo electoral y cuya incapacidad no se hubiese declarado en los apéndices á las listas rectificadas y ultimadas, podían ejercitar su derecho, debiendo computarse sus votos, y con arreglo al art. 47 la división del distrito municipal en Colegios, cualesquiera que fuesen sus defectos, no podía alterarse ni modificarse, sino en la forma y por los trámites que el mismo determina, ni demuestran que en la elección de que se trata se haya omitido trámite alguno, ó infringido los preceptos legales, que regulan el procedimiento electoral, ni prueban, por último, en debida forma la coacción que se supone ejercida en los electores por el Alcalde municipal y el Contador del Ayuntamiento durante los cuatro días de la elección y por el Celador de la policía y guardias á sus ordenes en el tercer día de la elección.

Por tanto entiende el Negociado que deben declararse válidas las elecciones ordinarias municipales de Jovellanos.

La Subsecretaría opinó conforme con el parecer del Negociado.

Vistos los relacionados antecedentes:

Considerando que se han justificado por acta notarial en este expediente coacciones, irregularidades é infracciones de ley que no pueden menos de afectar á la validez de las elecciones municipales de Jovellanos, y que,

por tanto, no pueden menos de admitirse los recursos de alzada interpuestos contra las mismas:

Considerando que la intervención del Celador de policía, no sólo con el prestigio de su autoridad sino hasta con las armas, no pudo menos de producir fuerza é intimidación en los electores, y que la Diputación provincial entendió que la declaración de nulidad de las elecciones no dejaría á salvo la dignidad de los electores ofendidos.

La Sección es de parecer que procede anular las referidas elecciones municipales y pasar el tanto de culpa contra quien haya lugar á los Tribunales de justicia.

Y habiéndose conformado con el preinserto dictamen S. M. el Rey (que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos que correspondan. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Enero de 1891.—Fabié.—Señor Gobernador general de Cuba.

Excmo. Sr.: Pasado á informe de la Sección de Hacienda y Ultramar del Consejo de Estado el expediente sobre recurso de alzada que interpone ante este Ministerio D. Higinio Medrano contra el acuerdo de la Comisión provincial de Santiago de Cuba que declaró válidas las elecciones municipales verificadas en el quinto Colegio de Guantánamo los días 4, 5, 6 y 7 de Marzo último, ha emitido el siguiente dictamen:

Excmo. Sr.: Con Real orden de 11 del corriente comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E., se remitió á la Sección el expediente en que D. Higinio Medrano pide que se declaren nulas las elecciones municipales de Guantánamo en la isla de Cuba que la Comisión provincial había considerado válidas.

Resulta de la copia del acta, que el Presidente, siendo las nueve y media de la mañana, se asoció á los únicos electores presentes como mas anciano y mas joven respectivamente, don Saturnino Cabrera y D. Miguel Gomez formando así la Mesa interina. A las tres de la tarde se hizo el escrutinio y proclamados los electos es les dió posesión en la Mesa definitiva. A las diez y media de la mañana del día siguiente 4 de Mayo último protestó el elector D. Joaquín Bas contra la validez de la elección de la Mesa interina por no haberse cumplido la ley que exige, no dos, sino cuatro Secretarios (art. 53), y porque uno de aquéllos era guarda nocturno municipal, de lo que resultó que, viendo mal constituida la Mesa, se retiraron algunos electores. También consta por acta notarial que á las once y media de dicho día el elector D. Manuel Ruiz formuló otra protesta en idéntico sentido.

El Presidente, aun reconocido el vicio de la elección, resolvió continuar el acto; pero constituida ya la Mesa el elector D. Juan Peces Tamayo volvió á protestar por las mencionadas razones. El Presidente había rogado al notario que permaneciese en el salón para que diera fe de que no se coartaba la libertad de los electores.

El elector Ruiz dijo que había duda acerca de si uno de los votantes era español ó americano.

Don Higinio Medrano protestó contra la validez de las elecciones verificadas en el quinto Colegio, y resultando empate en la Junta, el Presidente

las declaró válidas en el escrutinio del 12 de Mayo.

Apelaron ante la Comisión provincial los Secretarios escrutadores, y ésta, en el día 17, declaró válidas las elecciones de que se trata, fundándose en que la constitución de la Mesa interina con el Presidente y los dos Secretarios no es motivo de nulidad, porque no se preparaba ningún fraude, y se recibieron y contaron todos los votos ante el Notario, que presenció el acto, sin que conste la infracción de ningún precepto legal; lo mismo se hizo en la elección de Concejales en los días siguientes, sin que mediase protestas de los electores.

D. Higinio Medrano se alzó contra este acuerdo por las susodichas infracciones de ley en los actos electorales.

El Gobernador general al remitir el expediente informa que á su juicio debe desestimarse el recurso entablado por Medrano contra el acuerdo de la Comisión provincial.

El Negociado correspondiente en ese Ministerio y la Subsecretaría opinaron que debían anularse las elecciones del quinto distrito de Guantánamo por haberse formado ilegalmente (lo que se ha probado), la Mesa interina.

Vistos los relacionados antecedentes:

Vistos los artículos 53 y 59 de la ley Electoral:

Considerando que el Presidente de la Mesa electoral debe atenerse á la ley en todos y en cada uno de sus actos, no pudiendo ni debiendo reconocerse ninguna clase de poder discrecional para alterar en lo más mínimo sus disposiciones, que son otras tantas garantías de la libertad del sufragio:

Considerando que se ha probado plenamente la ilegal constitución de la Mesa con menor número de individuos que el que la ley dispone, y que siendo esto cierto, es completamente inútil examinar si las demás operaciones electorales se hicieron bien ó mal, puesto que tenían en su origen un vicio de nulidad que no podía subsanarse;

La Sección es de parecer que procede, de acuerdo con lo informado por ese Ministerio, declarar la nulidad de las elecciones municipales del quinto distrito de Guantánamo, en la isla de Cuba.

Y habiéndose conformado con el preinserto dictamen S. M. el Rey (que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y oportunos efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Enero de 1891.—Fabié.—Sr. Gobernador general de Cuba.

Gaceta núm. 32.

Excmo. Sr.: Pasado á informe de la Sección de Hacienda y Ultramar del Consejo de Estado el expediente relativo al recurso de alzada interpuesto por D. Fernando Santos contra el acuerdo de la Comisión provincial de Pinar del Río, que declaró su incapacidad para ejercer el cargo de Concejál en el Ayuntamiento de Alonso Rojas, ha emitido el siguiente dictamen.

Excmo. Sr.: Con Real orden de 23 de Octubre, comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E., se remitió á la Sección el expediente en que D. Fernando Santos se alza contra el acuerdo de la Comisión provincial de Pinar del Río, que declaró su

incapacidad para ser Concejál en Alonso Rojas.

D. Angel Arenal, vecino de este pueblo, pidió que fuese dado de baja el Concejál Santos, fundándose en que no figuraba en las listas electorales que sirvieron para la última elección ni como elector ni como elegible; la petición se conformaba con el art. 43 de la ley Municipal vigente y con la jurisprudencia admitida á juicio de Arenal. En sesión de Ayuntamiento, dos Concejales consideraron ilegal dicha pretensión, fundándose en que Santos no había dejado de ser contribuyente, como probaban dos recibos que tenían á la vista. El Presidente y la mayoría opinaron por declarar la incapacidad del expresado Santos. La Comisión provincial fué del mismo parecer, ó sea de que por incapacidad de éste debía quedar vacante el cargo, porque, según certificación, resultaba probado que Santos no figuraba en las listas electorales ultimadas, y no debía ser Concejál, según el párrafo segundo de la base 6.ª del artículo 43 de la ley Municipal.

Santos entabló recurso de alzada diciendo que en 1887 fué elegido Concejál por estar incluido en las listas y reunir todas las condiciones legales; que al rectificarlas quedó excluido por un error involuntario, y habiendo reclamado, el Ayuntamiento le dió la razón; pero la Audiencia á instancia de parte y fundándose en que los documentos de prueba presentados no estaban autorizados, les negó la inclusión. Los documentos, en efecto, por ser tan perecederos los plazos, no habían sido legalizados; puesto que sigue siendo contribuyente con la cuota exigida por la ley, debe continuar ejerciendo su cargo.

El Gobernador general dice que en su concepto procede la confirmación del acuerdo apelado por Santos.

El Negociado correspondiente en ese Ministerio dijo que no figurando Santos en las listas que se hicieron para las elecciones municipales en Alonso Rojas, como el mismo reclamante confiesa, procede desestimar su recurso de alzada contra el acuerdo de la Comisión provincial; del mismo parecer fué la Subsecretaría del Ministerio de Ultramar.

Vistos los reclamados antecedentes:

Visto el art. 43 de la ley Municipal de Cuba que dice «los Concejales cesarán en sus cargos si dejasen de tener las condiciones que marca la ley»:

Considerando que se ha acreditado que D. Fernando Santos no figura en las listas de electores ni elegibles del término municipal de Alonso Rojas, y que la Audiencia, según él confiesa, rechazó los documentos que presentó á la misma por no tener la conveniente legalización, con arreglo á las disposiciones vigentes;

La Sección opina que debe confirmarse el acuerdo de la Comisión provincial de Pinar del Río declarando incapacitado á D. Fernando Santos para formar parte del Ayuntamiento de Alonso Rojas, en la isla de Cuba.

Y habiéndose conformado con el preinserto dictamen S. M. el Rey (que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Enero de 1891.—Fabié.—Señor Gobernador general de Cuba.

CAPITULO II

De la suspension.

Art. 149. La suspension de los funcionarios del orden judicial tendra lugar por auto del Tribunal competente en los casos siguientes:

1.º Cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder criminalmente contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

2.º Cuando por cualquier otro delito se hubiere dictado contra ellos auto de prision o fianza equivalente.

3.º Cuando sin preceder prision ni fianza se pidiere contra ellos por el Ministerio fiscal una pena aflictiva o correccional.

4.º Cuando hubieren sido corregidos disciplinariamente por hechos

Art. 154. En los casos 1.º, 2.º y 3.º del art. 149, recibirá el suspenso la mitad del sueldo.

En los casos 4.º y 5.º del mismo artículo, y en los casos del 152, no recibirá ninguno.

Art. 155. Cuando el suspenso fuere absuelto libremente en los casos 1.º, 2.º y 3.º del art. 149, se le abonará la parte de sueldo que durante la suspension haya dejado de percibir.

CAPITULO III

De la separacion

Art. 156. Procederá la separacion cuando a juicio del Gobierno el funcionario de que se trata se mezcle en asunto politico que no sean la emision del voto electoral.

En todo caso se instruirá expediente en que se oiga al Gobernador general y al Presidente y Fiscales respectivos.

Si se tratare de un Magistrado, será oida además la Sala de gobierno del Tribunal Supremo.

Procederá siempre la audiencia del interesado, el cual además tendrá derecho a la concesion del término prudencial necesario para su justificacion.

Hasta que el funcionario no se declare personalmente destituido, la medida adoptada con el mismo se considerará una mera suspension.

CAPITULO IV

De la jubilacion

Art. 157. Los funcionarios del orden judicial que se inutilizaren fisica o intelectualmente para el servicio serán jubilados.

Art. 158. Podrán ser jubilados a su instancia o por resolucion del Gobierno.

Los Magistrados que hayan cumplido sesenta años.

Los demás funcionarios que hayan cumplido sesenta y cinco.

Art. 159. Cuando la jubilacion no sea a instancia del interesado, deberá ser oido el funcionario en el expediente gubernativo que al efecto se instruya, si se fundase en las causas expresadas en el art. 157.

Art. 160. Los funcionarios del orden judicial tendrán por jubilacion la que les corresponda, atendidos sus años de servicio, en los mismos términos que los que tienen iguales sueldos en las demás carreras del Estado, computándose el aumento de ocho años que

por razon de carrera les corresponde.

Art. 161. Los jubilados por inutilidad procedente de lesiones recibidas en actos del servicio o por consecuencia de ellas, disfrutarán:

El sueldo entero que hubiesen tenido como activos en el caso de haber servido en la carrera judicial o fiscal veinte años.

Cuatro quintas partes del mismo sueldo, cualesquiera que sean los años que hubieren servido.

Art. 162. Los jubilados por inutilidad antes de cumplir los sesenta años podrán ser rehabilitados y volver al servicio acreditando haber desaparecido la causa que hubiese motivado la jubilacion, y despues de oido el Consejo de Estado.

Los rehabilitados seguirán percibiendo el sueldo que como jubilados les corresponda hasta que sean de nuevo colocados.

TITULO V

DE LA RESPONSABILIDAD JUDICIAL

CAPITULO PRIMERO

De la responsabilidad criminal de los funcionarios del orden judicial.

Art. 163. La responsabilidad criminal podrá exigirse a los funcionarios del orden judicial cuando infringieren leyes relativas al ejercicio de sus funciones, en los casos expresamente previstos en el Código penal o en otras leyes especiales.

Art. 164. El juicio de responsabilidad criminal contra los funcionarios del orden judicial solo podrá incoarse.

1.º En virtud de providencia del Tribunal competente.

2.º A instancia del Ministerio fiscal.

3.º A instancia de persona hábil para comparecer en juicio.

Art. 165. Cuando el Tribunal Supremo, por razon de los pleitos o causas de que conozca, o de la inspeccion y vigilancia que sobre sus inferiores ejerza, o por cualquier otro medio, tuviere noticia de algún acto de funcionario del orden judicial que pueda calificarse de delito, mandará formar causa para su averiguacion y comprobacion, oyendo previamente al Ministerio fiscal.

Art. 166. Lo ordenado en el artículo anterior será extensivo a las Audiencias, en el caso de que sea de su competencia conocer del hecho que pueda calificarse de delito.

Si no fuere de su competencia, pondrán en conocimiento del Tribunal que la tenga los hechos, con los antecedentes que puedan ser útiles en los autos.

Art. 167. Los funcionarios del orden judicial se limitarán a poner en conocimiento del Fiscal de la Audiencia a cuyo territorio pertenezcan los hechos y los antecedentes que tengan, para que este pueda ejercitar la accion criminal correspondiente, o excitar a otro Fiscal a que proceda, si fuera de distinta jurisdiccion el delincuente.

La misma manifestacion harán al Presidente de la Audiencia, expresando que ya lo ha puesto en conocimiento del Fiscal.

Art. 168. El Ministerio fiscal podrá promover procedimientos criminales:

1.º En cumplimiento de una Real orden.

2.º En virtud del deber que tiene de promover el descubrimiento y el castigo de los delitos.

Art. 169. La Real orden en que se excite al Ministerio fiscal para incoar los procedimientos expresará el hecho o hechos que deban ser objeto de las actuaciones judiciales.

Art. 170. Cuando la Real orden mande proceder contra un funcionario del orden judicial, se trasladará al Fiscal de la Audiencia que corresponda el conocimiento de la causa.

Art. 171. El Fiscal del Tribunal Supremo, cuando tuviere conocimiento de algún hecho que dé lugar a exigir la responsabilidad de algún funcionario de los comprendidos en el artículo anterior, mandará proceder contra él dirigiéndose al Fiscal de la Audiencia respectiva con las instrucciones que estime convenientes, dando cuenta al Ministerio de Ultramar.

Art. 172. Los Fiscales de las Audiencias, cuando reciban del Tribunal Supremo la orden excitándolos a promover una causa contra funcionarios del orden judicial, entablarán la denuncia que proceda con arreglo a las leyes.

También harán la denuncia correspondiente los Fiscales de las Audiencias cuando llegue a su conocimiento la perpetración de algún delito cometido por un funcionario del orden judicial, sin necesitar excitación de su superior jerárquico ni del Gobierno.

Art. 173. En los casos en que los Fiscales de las Audiencias tuviere conocimiento de haber delinquido algún Magistrado, lo pondrán en conocimiento del Fiscal del Tribunal Supremo, el cual procederá a promover la causa si lo estimare procedente.

Art. 174. Los representantes del Ministerio fiscal harán la misma denuncia prevenida en el artículo anterior a los de las Audiencias de que dependan, relativamente a los delitos que cometan los funcionarios del orden judicial.

Art. 175. Para que pueda incoarse causa con el objeto de exigir la responsabilidad criminal a funcionarios del orden judicial en el caso 3.º del artículo 164, deberá preceder un antejuicio con arreglo a los trámites que establezca la ley de Enjuiciamiento criminal y la declaracion de haber lugar a proceder contra ellos.

Esta declaracion no prejuzgará su criminalidad.

Art. 176. Del antejuicio de que trata el artículo que precede, conocerá el mismo Tribunal que en su caso deba conocer de la causa.

CAPITULO II

De la responsabilidad civil de los funcionarios del orden judicial.

Art. 177. La responsabilidad civil de los funcionarios del orden judicial estará limitada al resarcimiento de los daños y perjuicios estimables que causen a los particulares, Corporaciones o al Estado, cuando en el desempeño de sus funciones infrinjan las leyes por negligencia o ignorancia inexcusables.

Art. 178. Se entenderá por perjuicios estimables para los efectos del artículo anterior todos los que puedan ser apreciados en metálico al prudente arbitrio de los Tribunales.

Art. 179. Se tendrán por inexcusables la negligencia o la ignorancia cuando, aunque sin intencion, se hubiese dictado providencia manifestante contraria a la ley, y se hubiere faltado a algún trámite o solemnidad mandada observar por la misma, bajo pena de nulidad.

Art. 180. La responsabilidad civil solamente podrá exigirse a instancia de la parte perjudicada o de sus causahabientes en juicio ordinario y ante el Tribunal inmediatamente superior al que hubiere incurrido en ella.

Art. 181. La demanda de responsabilidad civil no podrá interponerse hasta que sea firme la sentencia que

hubiere recaído en la causa o pleito en que se suponga causado el agravio.

Art. 182. No podrá entablar el juicio de responsabilidad civil el que no haya reclamado oportunamente durante el juicio pudiendo hacerlo.

En ningún caso la sentencia pronunciada en el juicio de responsabilidad civil alterará la sentencia firme.

TITULO VI

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES

CAPITULO PRIMERO

Atribuciones de los Jueces municipales o de paz.

Art. 183. Corresponderá a los Jueces municipales o de paz en materia civil:

1.º Intervenir en la celebracion de los actos de conciliacion.

2.º Ejercer la jurisdiccion voluntaria en los casos para que expresamente les autoricen las leyes.

3.º Conocer en primera instancia y en juicio verbal de las demandas cuyo objeto no excederá de 200 pesos.

4.º Dictar a prevención las primeras providencias en las testamentarias o sucesiones intestadas, cuando proceda según las leyes en los pueblos donde no hubiere Juzgado de primera instancia, hasta que este tome conocimiento de ellas.

Se entenderá por primeras providencias para los efectos de este artículo las que tengan por objeto poner en seguridad los bienes de las herencias y proveer a todo lo que no admita dilacion.

Quando los Jueces municipales o de paz intervengan en estas actuaciones lo podrán inmediatamente en conocimiento del Juzgado de primera instancia, a que remitirán las diligencias que hubieren practicado.

5.º Adoptar, en los casos que requieran una determinacion que, sin daño de los interesados, no pueda diferirse, providencias interinas, dando cuenta al Juzgado de primera instancia con remision de los antecedentes.

6.º Desempeñar las comisiones auxiliaorias que los Jueces de primera instancia o las Audiencias les confieran.

7.º Conocer de los demás juicios que se les encomienden por las leyes.

Art. 184. Corresponderá a los Jueces municipales o de paz en materia penal:

1.º Conocer en primera instancia de los juicios de faltas.

2.º Instruir a prevención las primeras diligencias en las causas criminales.

3.º Desempeñar las comisiones auxiliaorias que los Jueces de instrucion de primera instancia o las Audiencias les confieran.

CAPITULO II

De las atribuciones de los Jueces de instrucion y de primera instancia

Art. 185. Corresponderán a los Jueces de instrucion y de primera instancia:

En lo civil desempeñar las funciones que expresamente les atribuyan las leyes y las comisiones que para la practica de determinadas diligencias les confieran las respectivas Audiencias.

En lo criminal, instruir las sumarias de las causas y las demás diligencias que se les encarguen las Audiencias.

En lo civil y criminal, desempeñar las comisiones auxiliaorias que por conducta de la respectiva Audiencia les dirijan otros Jueces o Tribunales.

De las atribuciones de las Audiencias

Art. 186. Corresponderá á las Salas de lo civil de las audiencias:

1.º Decidir las competencias que se susciten en materia civil entre los Jueces municipales ó de paz de su distrito que correspondan á diferentes partidos.

2.º Decidir las competencias en materia civil entre los Jueces de primera instancia de su distrito.

3.º Conocer de los recursos de fuerza que se promuevan contra los Jueces eclesiásticos, sufraganeos ó metropolitanos en materia civil.

4.º Conocer en única instancia de los incidentes en asuntos civiles, cuando versen sobre recusación de sus Magistrados.

5.º Conocer en primera instancia de los recursos de responsabilidad civil que se promuevan contra Jueces municipales ó de paz y de primera instancia.

6.º Conocer en segunda instancia: De los juicios y de los negocios civiles de que hubieren conocido en primera los Jueces de primera instancia de su territorio.

De los incidentes de recusación de Jueces de primera instancia.

7.º Auxiliar á la administración de justicia en lo civil siempre que sean requeridos al efecto por otros Jueces ó Tribunales.

Art. 187. Además de los incidentes para cuyo conocimiento atribuye competencia la ley de Enjuiciamiento criminal á las Salas y Audiencias de lo criminal y Audiencias territoriales, conocerán también.

Las Salas y Audiencias de lo criminal de todas las causas por delitos cometidos dentro de su respectiva provincia ó circunscripción que competan á la jurisdicción ordinaria, con excepción de aquellas de que actualmente conoce el Tribunal Supremo, y salvo lo dispuesto en este decreto-ley ó en leyes especiales.

Las Salas de lo criminal de las Audiencias territoriales, de las causas referentes á delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones dentro de su respectivo territorio.

1.º Por Diputados provinciales.

2.º Por Concejales de Ayuntamiento de las capitales de provincia y poblaciones donde haya Audiencias.

3.º Por Autoridades administrativas de las mismas poblaciones, con excepción de los Gobernadores civiles y militares.

Las Audiencias territoriales en pleno de las causas por toda clase de delitos que cometan los Auxiliares del Ministerio fiscal de las Audiencias de lo criminal.

TITULO VII

DE LOS AUXILIARES DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES

Art. 188. Bajo la denominación de Auxiliares de los Juzgados y Tribunales, se comprenden:

- Los Secretarios judiciales
- Los Archiveros judiciales.
- Los Oficiales de Sala.
- Los Escribanos de actuaciones.
- Los actuarios testigos de asistencia.

CAPITULO PRIMERO

De los Secretarios judiciales

Art. 189. Habrá Secretarios: De Juzgados municipales ó de paz. De Juzgados de instrucción. De Salas de justicia de las Audiencias territoriales. De gobierno de las Audiencias territoriales.

Habrá también Secretarios y Vicesecretarios de las Audiencias de lo criminal.

Sección primera

DE LAS CONDICIONES COMUNES Á LOS SECRETARIOS JUDICIALES.

Art. 190. Para ser Secretario, cualquiera que sea su denominación ó clase, se requiere:

1.º Reunir las condiciones que exige el art. 73 de este decreto-ley para ser Juez ó Magistrado.

2.º No estar comprendido en ninguno de los casos de incapacidad que para los mismos señala el art. 50.

3.º No obtener cargo ó empleo de los que son incompatibles con las funciones judiciales, según el art. 75.

Exceptuase de esta disposición los Secretarios de los Juzgados municipales ó de paz, en los casos que expresa este decreto-ley.

Art. 191. Los que intervengan en la propuesta y nombramiento, de Secretarios judiciales, cuidarán de enterarse de si reúnen las condiciones que exige este decreto-ley, ó si por cualquier causa estuvieren inhabilitados para obtener la plaza que haya de proveerse.

Art. 192. En los cargos que se provean por oposición deberá cumplirse lo establecido en el artículo que antecede, antes que comiencen los ejercicios, admitiendo en ellos solo á los que no tuvieren tachas legales.

Los que obtuvieren empleos ó cargos incompatibles, serán admitidos á las oposiciones si manifestasen que en caso de obtener la plaza que pretenden, harán renuncia del que con ella sea incompatible.

Art. 193. El ejercicio de los empleos de Secretarios de Juzgados ó Tribunales será justa causa para eximir de los cargos obligatorios de que se hace mención en el número tercero del artículo 190, siendo extensivo á los Secretarios judiciales lo que respecto á los Jueces y Magistrados se ordena expresamente en los artículos 76 y 77 de este decreto-ley.

Art. 194. Los Secretarios judiciales, antes de tomar posesión de sus cargos, prestarán juramento de guardar la Constitución del Estado, ser fieles al Rey y de cumplir con diligencias las leyes que se refieran al ejercicio de su cargo.

Prestarán este juramento:

Los Secretarios de Juzgados municipales ó de paz y de instrucción, ante el Juez á quien hayan de auxiliar.

Los de Sala de justicia de las Audiencias territoriales y los Secretarios y Vicesecretarios de las de lo criminal, ante la Sala ó Audiencia en que hayan de desempeñar sus cargos.

Los de Gobierno de las Audiencias territoriales, ante la Sala de Gobierno del Tribunal respectivo.

Art. 195. Los Jueces ó las Salas correspondientes darán posesión de sus cargos á los Secretarios á continuación de haber prestado juramento.

Art. 196. Será obligación de los Secretarios de los Juzgados municipales ó de paz, de instrucción y de Salas de justicia de las Audiencias, así como de los Escribanos de actuaciones y actuarios testigos de asistencia.

1.º Auxiliar á los Jueces, á las Salas y á los Tribunales según sus respectivos cargos, en todo lo que se refiere al ejercicio de la jurisdicción voluntaria ó contenciosa, en lo civil ó criminal.

(Continuará.)

TRIBUNALES

PRIMERA INSTANCIA

El Sr. Juez de primera instancia de este partido en providencia de esta fecha dictada en los autos de abintestato de la fincabilidad de Manuel Sieiro, vecino que fué de esta villa promovidos por el Procurador de este Juzgado D. Gabriel Martínez Basalo en representación de Manuel Feijo, viudo de Luisa Sieiro á nombre de los hijos menores habidos en el matrimonio de los mismos, declarados legalmente pobres, se ha servido acordar la citación de todos los herederos para la junta que determina el art. 1068 de la ley de Enjuiciamiento civil que ha de tener efecto en su audiencia del día 4 de Febrero próximo á las diez de la mañana. Y siendo uno de ellos Manuel Sieiro Fernandez, ausente en ignorado paradero se le cita en forma á solicitud de dicho Procurador para su comparecencia en el sitio hora y día expresados, con la prevención que de no concurrir al auto le parará el perjuicio á que haya lugar en derecho.

Celanova Enero 24 de 1891.—El actuario, Francisco Vazquez Rodriguez.

Don Avelino Alvarez C. y Perez, Juez de instrucción de la villa de Noya provincia de la Coruña.

Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo al procesado Manuel Romar Garcia, hijo de José y Juana, natural y vecino de Santa Savina, Ayuntamiento de Santa Comba, partido de Negreira, de veintidos años de edad, soltero, desertor del ejército, cuyo paradero se ignora, y de las señas personales que se dirán, para que dentro del término de diez días comparezca en la carcel pública de este partido á constituirse en prision decretada contra el mismo en causa que se le instruyen este Juzgado sobre hurto de unas expuelas de plata y unos cincuenta reales en calderilla á don Manuel Viturro Pose, de la parroquia de Barro, mientras no presentare fianza, y á prestar declaración de inquirir, previniéndole que de no comparecer será declarado rebelde y le parará el perjuicio que haya lugar en derecho.

Al propio tiempo encargo á todas las autoridades civiles, militares y judiciales, y á los Agentes de policía, procedan á la busca y captura del mencionado procesado Manuel Romar Garcia, poniéndolo caso de ser habido en la carcel de este partido con las seguridades debidas y á disposición de este Juzgado.

Noya Enero veinticuatro de mil ochocientos noventa y uno.—Avelino Alvarez C. y Perez.—Por mandado de su señoría, José Manuel Morales.

Señas del Manuel Romar

Estatura pequeña
Cara redonda y pequeña.
Color bueno.
Barba afeitada ó poblada.
Viste: pantalon y chaqueta de tela muy usados.
Chaleco encarnado.
Boina oscura.
Calza zuecos.
Usa también el traje militar, y el calzon al estilo del país de su naturaleza.

ANUNCIOS

GRAN SUCURSAL

de la

ACREDITADA SOMBRERERÍA ANDALUZA

Instituto, 14.—Bajo.

El dueño de este renombrado establecimiento, el conocido industrial D. Alejandro Gonzalez, altamente agradecido al creciente favor que el público le viene dispensando, y con objeto de poder atender con mayor esmero y solicitud á sus numerosos parroquianos, ha establecido una sucursal de su SOMBRERERÍA ANDALUZA situada en la calle de Tetuán, en la calle del Instituto núm. 14, en la cual sucursal encontrará el público un completo, elegante y variado surtido de sombreros de todas clases á precios económicos. —11

14 Instituto 14.

ORENSE.

EL SECRETARIADO

MADRID

SAN JOAQUIN, 3, PRINCIPAL

Para discutir y aprobar definitivamente las bases y estatutos del Montepío de Secretarios de Ayuntamiento y Juzgados municipales, el 17 de Febrero próximo se celebrará en Madrid, en las oficinas del periódico *El Secretariado*, la gran asamblea de dichos funcionarios compuesta de un delegado de los mismos por cada provincia.

Dicha asamblea se ocupará además de la redacción de un proyecto de ley sobre creación de la carrera de Secretarios de Ayuntamiento, proyecto que será presentado al señor Silvela, actual Ministro de la Gobernación, á fin de que el mismo lo tenga presente al llevar á las Cortes los trabajos realizados por dicho señor Ministro en el indicado sentido.

ASOCIACION MÚTUA

PARA LA REDENCIÓN Á METÁLICO DEL

SERVICIO MILITAR ACTIVO

Reemplazo de 1890.

Seguros mútuos contra quintas, depositando 750 pesetas.

Idem á prima fija, depositando 1000 pesetas.

Idem id. id., especial para Ultramar únicamente, depositando 300 pesetas.

Todos los depósitos se efectúan en el Banco de España.

Para noticias é impresos dirigirse al representante en esta provincia: LA ACTIVIDAD, calle de Alba, número 19.—Orense.

MONTEPIO NACIONAL

IMPOSICIONES, AHORROS Y PRESTAMOS

PARA LAS QUINTAS

(Autorizado por Real orden de 30 de Junio de 1889)

Dirección: Calle de S. Honorato, 1 Plaza de S. Jaime—Barcelona.

Se facilitan prospectos y todos los informes necesarios en la Delegación á cargo de don Evaristo Fernandez Villarino, calle Fuente de Monte núm. 1.º Orense.

Imprenta LA POPULAR.